

## El palo y la zanahoria de Bruselas con España

■ Manuel Capilla

El presidente de la Comisión Europea, **Jean-Claude Juncker** y su comisario de Economía, **Pierre Moscovici**, deshojan estos días la margarita. Se debaten entre multar a España por incumplir los objetivos de déficit, y poner otro lastre en el esfuerzo presupuestario del Estado, o darle una prórroga de al menos un año y dejar en papel mojado la normativa de estabilidad financiera diseñada a raíz de la crisis del euro. Aunque en esa disyuntiva cabe una amplia gama de grises, según las informaciones que han ido apareciendo en estos últimos días, por lo que es probable que se termine adoptando una decisión salomónica. O, lo que es lo mismo, que decidan hacer las dos cosas a la vez, multar a España y conceder más tiempo al gobierno que todavía preside **Mariano Rajoy**. En la rueda de prensa que el comisario dio la semana pasada para presentar las previsiones de primavera de la Comisión, Moscovici explicó que “obviamente hay decisiones que tomar (...), pero abordaremos ese asunto a su debido tiempo”.

Son muchas las opciones de un veredicto que seguramente llegará en junio, en plena campaña o precampaña electoral. Según las informaciones que se han venido publicando en los últimos días, la Comisión estaría preparando una multa de 2.000 millones de euros, el 0,2 por ciento del PIB, como se



P. Moscovici.

**“En Bruselas están convencidos de que hay que ‘apretarle las tuercas’ a nuestro país, porque se han superado ampliamente los objetivos de déficit”**

recoge en el procedimiento por déficit excesivo. Esta sería la primera multa que se impone a un Estado por superar los objetivos de déficit, aunque otras informaciones que también apuntan a que las autoridades europeas estarían dispuestas a conceder a España otra prórroga. En cualquier caso, en Bruselas están convencidos de que hay que “apretarle las tuercas” a nuestro país, porque no se puede dejar al Ejecutivo de Rajoy que se

vaya de rositas después de haber superado ampliamente los objetivos de déficit.

Y es que los objetivos de estabilidad previstos por el Gobierno y aprobados por Bruselas situaban el déficit público para el presente año por debajo del 3 por ciento, en el 2,8%, y continuaba la senda de descenso en los siguientes ejercicios, con una reducción hasta el 1,4% en 2017 y al 0,3 por ciento en 2018. Sin embargo, tras incumplir el objetivo de déficit de 2015, que estaba situado en el 4,2%, sobrepasando el gasto en más de 8.000 millones de euros, llegando hasta el 5%, el Ejecutivo ha optado por hacer previsiones macroeconómicas “más realistas”, tal y como aseguró la semana pasada el ministro de Economía y Competitividad en funciones, **Luis de Guindos**. El nuevo escenario macroeconómico, que será aprobado formalmente a finales de mes por el Consejo de Ministros, plantea bajar desde el déficit del 5% de 2015 a otro del 2,9% en 2017, en vez del 1,4% comprometido. Y para 2016, el objetivo del Ejecutivo sería elevar en un punto el objetivo de déficit para 2016, con lo que pasaría del 2,8% actual a una cifra entre el 3,5 y el 4% del PIB. A grandes rasgos supone recortar en los dos primeros años de la nueva legislatura 19.000 millones en vez de 37.000. Un esfuerzo que el Ejecutivo considera manejable por el aumento de la recaudación y un crecimiento sostenido cercano al

2%.

Es decir, que con el nuevo proceso electoral en marcha, el Ejecutivo ha decidido aparcar el 50% del ajuste presupuestario. Ante un calendario que va a tener que iniciar un gobierno en funciones, porque la fecha límite para la presentación del techo de gasto y su aprobación por el Congreso, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos, debe presentarse antes del 30 de junio. Sin embargo, esa presentación puede demorarse, como ya sucedió el año pasado, hasta que las Cámaras se hayan

**“La opción de que la Comisión conceda a España un año extra cobra cada vez más fuerza, en lo que sería la cuarta prórroga que se concede a nuestro país”**

constituido de nuevo. Y eso no sucederá hasta la semana del lunes 18 de julio.

El problema es que Bruselas tampoco se cree las nuevas previsiones del Ejecutivo, y no se traga que España pueda cumplir con las previsiones de déficit ni este año ni el que viene. Dicho de otra forma, Bruselas ya asume que España necesita una prórroga sí, pero no de un año, sino de dos. Moscovici lo dejaba claro la semana pasada: “España tendrá

que tomar medidas”. Eso sí, sin especificar cuáles son esas nuevas medidas que espera Bruselas por parte de España. Y de paso, el comisario le lanzó un dardo a un Rajoy que le criticó severamente en octubre por alertar entonces de que España incumpliría el déficit de 2015, tal y como finalmente sucedió. “Solo digo una cosa”, subrayó Moscovici al ser preguntado por España, “las previsiones que ha realizado la Comisión sobre la economía española siempre resultan ser correctas”.

En cualquier caso, a la espera de que se conozca definitivamente la posible sanción que pueda caerle a la senda presupuestaria diseñada por **Cristóbal Montoro**, la opción de que Bruselas conceda a España un año extra cobra cada vez más fuerza, en la que sería la cuarta prórroga que se concede a nuestro país en la senda de consolidación fiscal. Eso sí, la prórroga no invalidaría la posibilidad de la multa. O por lo menos no invalidaría el hecho de que Guindos tenga que ir a Bruselas con contrapartidas a cambio del año extra. De momento, el Ejecutivo ha ofrecido un aperitivo de esas contrapartidas con el recorte adicional de 2.000 millones de euros, dos décimas del PIB, por parte de la Administración Central. Aunque desde luego esa cifra no es suficiente, sobre todo porque se va a repartir entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

## Crónica mundana

### Hollande se descuelga del Tratado de Libre Comercio

■ Manuel Espín

Nada menos que 13 rondas de negociaciones se vienen celebrando desde 2013 para lo que constituye la aspiración a un **Tratado de Libre Comercio** entre Europa y Estados Unidos, el llamado **TTIP**. Sobre el papel un proyecto de enorme trascendencia: la creación de una gran zona de intercambios en el área más desarrollada del planeta sin trabas ni barreras comerciales. En la realidad, un choque entre dos concepciones antagónicas de producir y dos modelos de negocios. Los partidarios del Tratado aducen que su firma inyectará millones a ambos lados del **Atlántico**. Sus adversarios, que destruirá la industria europea en áreas muy sensibles e introducirá modelos culturales totalmente antagónicos con los de este lado del mundo. El borrador del acuerdo tiene puntos especialmente sensibles: la alimentación y la cultura, especialmente la audiovisual. Sectores que son prioritarios para Europa, pero especialmente para **Francia**, que hace de ellos banderas de su identidad.

En su reciente visita a Europa, **Obama** expresó su intención de dejar firmado el Tratado antes de abandonar la **Casa Blanca**. De no lograrse, su posible heredera, **Hillary Clinton**, mantendrá como prioritaria idéntica política. En Europa, el presidente norteamericano recibió apoyos de **Merkel** y la **Gran Coalición**



F. Hollande.

**“Embarranca la negociación tras las filtraciones de Greenpeace de Holanda sobre la seguridad alimentaria”**

**“Obama desea que el acuerdo EE UU-UE se firme antes de dejar en enero la Casa Blanca”**

(democrisiana-socialista), pero con una opinión pública germana que empieza a mostrarse adversa. El pasado martes, Hollande decía *no* al Tratado en los términos en los que se está redactando, por “violación principios básicos de

nuestra agricultura y cultura a cambio de reciprocidad de acceso”. La situación política que vive el **Elíseo** presiona en favor del discurso nacionalista con la mirada puesta en unas presidenciales en las que podría competir en segunda vuelta la extrema derecha frente a la derecha, y el **PSF** quedar en la cuneta. A la vez, las opiniones públicas de Francia o de **Alemania** son receptivas a las críticas contra el Tratado, y tienen que ver con problemas sanitarios, alimentarios, sociales, culturales y medioambientales.

Una filtración de **Greenpeace** en **Holanda** sobre puntos de la negociación añade más leña al fuego. Según esos documentos confidenciales, se reducirían los estándares medioambientales y de seguridad alimentaria, en versión de las organizaciones ecologistas, “dando el poder a las multinacionales contra los derechos de los consumidores y los gobiernos nacionales”. Merkel critica la filtración y dice que es contraproducente “pues puede acelerar la presión hacia la firma del Tratado”, mientras por parte americana se califica de “engañoso”. Uno de los puntos de discrepancia afecta a los controles sobre los productos de alimentación. Según las normativas de control de calidad, en Estados Unidos es el producto final cuando se distribuye el sometido a fiscalización. Bajo el modelo europeo, toda la cadena desde la producción a su

colocación a disposición de los consumidores está bajo una estricta regulación. Desde el lado europeo los sectores más críticos temen que se acepte una “regulación deficiente” inferior a las grandes exigencias de calidad europea a lo largo de todo el proceso; poniendo como ejemplo productos como el llamado “pollo colorado”, en el que a través de un tratamiento final de “lejíja” se disimula la contaminación que ha podido sufrir el producto en su origen, práctica prohibida en la normativa europea, o la mayor laxitud en el uso de hormonas en la carne. Hay además un miedo por parte de Francia (y de otros países): Estados Unidos, gracias a esa mayor tolerancia, puede colocar en los mercados mundiales productos alimenticios a precios supercompetitivos. Aspecto que choca de frente con los modelos productivos de la agricultura y la industria de la alimentación francesa, considerados “sector prioritario” por el país vecino, pero “más caros” dado el mayor cumplimiento de estándares de calidad.

Aparece otro elemento de discordancia vinculado a la industria cultural. Desde mucho tiempo atrás el sector audiovisual europeo se ha opuesto a la inclusión de esta área dentro del Tratado, respetando el modelo de “excepción cultural” que Francia esgrime como base de su iniciativa. El audiovisual es prioridad absoluta tanto para

Estados Unidos como para Francia (no así para Estados Unidos como **España** donde apenas hay referencias a la cultura en los partidos de las cuatro grandes fuerzas que compiten el 26-J). Por el contrario, la negociación para el TTIP apenas aparece en la campaña para el referéndum británico sobre la **UE**; su agricultura tiene un escaso peso frente a la de Francia o Alemania. **Inglatera** suscribe los puntos de vista americanos frente a la oposición radical de Francia. Lo que hasta ahora venían siendo dudas, dentro de un juego de negociaciones y escarceos entre los distintos intereses en juego de los Estados de la UE y EE UU, desde la semana pasada es un choque de trenes. **Hollande** pide que se suspendan las negociaciones después de tres años de ronda. La patata caliente la pasa a Bruselas, con una burocracia más predisuelta a llegar acuerdos con Estados Unidos, aun a costa de rebajar algunas exigencias. Frente a un protagonismo creciente de unas opiniones públicas en clave de las más diversas posiciones, del populismo al nacionalismo, y las orientaciones ideológicas más diversas, de la izquierda a la ultraderecha. La Comisión se puede encontrar con otro problema que sumar al de la crisis de los refugiados, cerrada en falso... Washington presiona a los ejecutivos para la firma del TTIP, pero no todos están por la labor, y las opiniones públicas empiezan a mostrarse extremadamente sensibles ante los temas que afectan a su calidad de vida.